

# Argentina 1983-1989

*Eusebio Maestre Wilkinson*

1

7

1

**L**a complicada y difícil transición democrática en la república Argentina, ha generado una multiplicidad de problemas y reflexiones. Todas ellas coinciden en asignarle a este proceso y a su devenir un alto grado de incertidumbre.

En el año de 1983 el peronismo, por primera vez en su historia, pierde unas elecciones realizadas después de una etapa de alta inestabilidad política que abarcó de 1955 a 1973 más los años que comprendió el denominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-83).

Las razones de este vuelco de los votantes deben buscarse en el contenido de una campaña electoral desarrollada por el Partido Justicialista (peronista),

pleno de ribetes autoritarios e intolerantes, y con ciertas indefiniciones respecto a tópicos sustantivos como los referidos al problema militar y a la deuda externa, y así mismo al manejo limitado del proceso de democratización de las estructuras partidarias propias. Estas cuestiones, muy presentes y significativas para una sociedad que pugnaba por emerger de un periodo de inusitada y generalizada violencia institucional, así como el fatal recuerdo de los últimos años de gobierno de dicha corriente política (administración de Isabel Perón), hicieron que sectores que tradicionalmente la habían apoyado, orientaran sus preferencias hacia una oferta más equilibrada y estructurada, que prometía

además resolver con mayor firmeza y solvencia la problemática indicada y salir al encuentro de las dinámicas democráticas.

Las expectativas se centraron, a partir de ahí, en los términos posibles de la relación interpartidaria y en el papel que jugara en el seno del Parlamento los diversos partidos políticos. Se pensó que este ámbito permitiría procesar tensiones y conflictos y llegar a acuerdos, para lo cual, radicales y peronistas fundamentalmente, deberían encontrar nuevos modos de interacción que permitieran a cualquier planteamiento y reclamo de la oposición no ser enfrentado como un intento de desestabilización de la democracia; a la vez la conducta de la misma debería ajustarse a sostener el nuevo orden democrático a través de un comportamiento que buscara permanentemente apoyar este objetivo básico.

De este modo y en un país con fuertes tendencias centralistas, presidencialistas y, en esencia, autoritarias, el Parlamento, la acción interpartidos y la activa movilización social y política deberían permitir la ampliación de los frentes de comunicación, trabajo y acuerdos, para así poder avanzar dentro de las estructuras y comportamientos rígidos y lineales de nuestra cultura, comportamientos que, de hecho, habían sido reforzados durante los años de la dictadura. También existió una falta de acuerdos básicos, de programas de gobierno previos a las elecciones que agudizó los enfrentamientos entre partidos e impidió, *a posteriori*, movilizarse a través de ejes y reivindicaciones más claros. Asimismo, en estos primeros años se dio una manifiesta imposibilidad e incapacidad del poder político (por la no constitución de apoyos más globales al polo o matriz cultural progresista) para franquear la distancia entre la esfera de lo

político y la referida a lo económico y social.

Al mismo tiempo y como un sustrato perdurable, se ha sostenido la difusión de discursos que sostienen aún hoy, y desde posiciones supuestamente contestatarias, que la idea de democracia ha sido rescatada y revalorada en toda su magnitud gracias a la terrible experiencia vivida bajo los regímenes autoritarios.

Es probable que esta idea no haya sido elaborada y hondamente considerada en Argentina, lo cual no implica que toda la problemática referida a este tipo de ordenamiento político no haya sido discutida y enriquecida en sus contenidos y aspectos más significativos en los últimos años, ni derivar de ello que ésta pudiera ser un beneficio de la precedente e inmediata administración autoritaria.

Si bien lo anterior es un indicador saludable, aún se observan tratamientos muy fragmentarios al respecto y, en general, circunscritos al ámbito de la democracia política. En este marco se hace necesario tomar en cuenta que nuestra sociedad ha sido producto, en buena medida, del accionar de una matriz cultural con fuertes elementos segregadores, donde la realización de las expectativas de otras matrices ha sido más bien reducida y con tendencias cercanas a cero. De esta forma, la idea democrática no ha alcanzado aún el estatus de esquema generador y ordenador de lo político.

Por otra parte, es dable observar que las elites políticas y de poder han operado sobre el conjunto en forma descalificadora, lo cual ha facilitado el proceso de imponer el orden "desde arriba" suponiendo que nuestra sociedad, según esta visión, no está preparada para gobernarse democráticamente. Así, y luego de

1

7

2

“superar” la instancia autoritaria, todo parecía indicar la necesidad del objetivo surgimiento de nuevas instancias, de renovación amplia de cuadros políticos y de metodologías de discusión y elaboración de acuerdos políticos; pero esta dinámica ha sido acotada estrechamente y los viejos métodos de gestión política, no transparentes, siguen en boga.

Ya más cercanas en el tiempo, las últimas elecciones presidenciales de mayo de 1989 se insertan en un marco de profundos desajustes económicos, de alta tensión social y política y de potenciales enfrentamientos interpartidarios.

La administración de Raúl Alfonsín sostuvo a lo largo de su gestión un manejo de política salarial y sindical que le acarreó una permanente oposición y la realización de trece huelgas generales.

Asimismo, el manejo del problema de la deuda marchó en distinto sentido al originalmente planteado, ya que todo su monto fue aceptado como legítimo y su tratamiento hubo de ajustarse a los lineamientos de las grandes agencias internacionales. Respecto al manejo del problema militar, ante diversas alternativas, se optó por mediatizarlo emitiendo leyes como la de Obediencia Debida y la de Punto Final, para dispensar al sector castrense obviando situaciones de franca rebeldía institucional.

Por su parte, el peronismo se presentó a esta confrontación apoyando a sus dirigentes en posturas más conciliadoras y negociadoras, lo cual representó el abandono de sus posturas alternativas tradicionales y la remisión al realismo más estrecho, de corte fatalista y casi religioso.

La alternativa generada en el interior del peronismo por la corriente denominada “renovadora”, y que se manifestó triunfante en las elecciones para gobernadores provinciales de 1987, donde el

doctor Cafiero obtuvo el cargo para la más importante provincia argentina, no pudo lograr la nominación de candidato a presidente en las elecciones de 1989. La razón de este fracaso se debe, según diversos analistas políticos, al ofrecimiento realizado por Cafiero a Alfonsín (con posterioridad a 1987) de un pacto de gobernabilidad, lo cual terminó “indiferenciándolo”, a los ojos de muchos afiliados peronistas, de un gobierno que buscó ajustar las variables económicas a costa de los obreros, sector en el que el peronismo tiene muchos adeptos y autoridad. Así, el nuevo ordenamiento democrático no supo responder a las expectativas, incrementando la confianza, cerrando la brecha entre lo político y lo económico y social, ni controlar la sostenida e incrementada rebeldía de los operadores económicos a cualquier tipo de conducta concertada, por lo cual el descreimiento y desazón en la sociedad se han multiplicado. De esta forma, el sentido de unas nuevas elecciones, a las cuales parecía imposible llegar, queda en alguna medida demeritado por el marco de una situación casi caótica, que facilita el recurso a soluciones alternativas de muy diversa índole, siempre y cuando sean distintas a la oferta insatisfactoria y ya carente de consenso del régimen de Alfonsín.

Así, en las reformas que se propusieron se aprecia la carencia de ideas y diseños que retraduzcan su referencia a las masas y a un permanente y orientado proceso de movilización y organización de las mismas. En esta situación, la necesidad de un pacto de gobernabilidad y, más aún, de un gobierno de coalición se hacía imprescindible, a fin de tratar de lograr un orden democrático de perfil dinámico que recrea nuestras matrices y nuestro quehacer político, alejando definitivamente el retorno de

1  
7  
4

cualquier tipo de práctica y alternancia autoritaria. Pero, para lograr lo anterior, así como para establecer bases firmes de viabilidad era necesario precisar un compromiso a largo plazo con la sociedad, asentado en un programa concreto de realizaciones y en los mecanismos más amplios de consulta y concertación posibles, así como en los procedimientos más transparentes. Lamentablemente, el drama del nuevo ordenamiento estriba en la objetiva y manifiesta incompreensión e incapacidad de los dos grandes partidos políticos (la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista) para establecer un orden político que posibilite derribar todo el enfoque reaccionario de nuestra sociedad, encarando la reforma del Estado y de la sociedad civil.

Ante las últimas elecciones, y más hoy, es difícil pensar que una situación tan agravada en los diversos órdenes y mucho menos "favorable" que la "originalmente" planteada en diciembre de 1983, pueda ser resuelta por el acceso de una nueva administración. Los riesgos de una involución profunda en el orden político y social son ahora mayores, pues los factores que entorpecieron y atacaron la realización de reformas sustantivas se han fortalecido, y los recursos y requerimientos para enfrentarlos deberán ser muy superiores, lo cual se ve como muy problemático de lograr. De aquí también que se haga cada vez más necesario que los procesos de renovación y cambio en el interior de los partidos políticos se hagan en profundidad y rápidamente, así como la revitalización de reformas constitucionales que permitan jugar un papel más dinámico y efectivo en el Parlamento y en los sistemas de representación, tanto provinciales como municipales.

A pesar de estas casi obvias urgencias y requerimientos, las elecciones del 14

de mayo de 1989 fueron además realizadas por medio de mecanismos de representación o elección indirecta (situación altamente atípica en Argentina), porque posibilitaba que en el seno del Colegio Electoral se establecieran acuerdos que pudieran arrebatarle el triunfo a la primera minoría resultante.

Habida cuenta del alto número de "indecisos" que todos los sondeos previos de opinión "revelaban", la posibilidad de que la suma de los electores de segundas y terceras minorías se coaligaran no era despreciable. De este modo, gran parte del debate político ciudadano giró en torno a los distintos tipos de alternativas susceptibles de darse en el Colegio Electoral, según fueran los resultados y los porcentajes de electores obtenidos por cada una de las fuerzas políticas más importantes.

Independientemente de la legalidad de este tipo de alianzas por parte de cada uno de los contendientes, el tema en cuestión era la legitimidad de acciones de esta índole y, más que nada, de qué posibilidades reales de sostener la democracia, ya sumamente deteriorada, brindaba esta metodología y ciertas probables alternativas.

De esta forma, una de las consecuencias posibles de esta metodología electoral podía reflejarse sobre la real gobernabilidad del sistema político. Otra de las derivaciones tendía a demostrar la falta de transparencia de los manejos intra e interpartidistas, dado que las especulaciones relativas a posibles alianzas y acuerdos en el Colegio Electoral siempre operaron en el nivel de la sociedad en general, mas nunca fueron explicitados y debatidos por las dirigencias políticas.

En este sentido fue evidente que el deseo de lograr el acceso o de sostener la participación en el aparato del Estado,

fue superior al anhelo de perfeccionar un modelo de creciente gobernabilidad y fuerza política. En esta línea de conducta era posible advertir, una vez más, que lo coyuntural, lo táctico, la convivencia partidaria, anula convicciones proclamadas e impide empalmar anhelos en aras de un proyecto nuevo de nación.

De este modo, sigue predominando en este escenario una política de confrontación sin síntesis, de oposición dura y muchas veces desleal, a lo cual se agregó en esta oportunidad cierta perversión al poder pretendiendo arrebatar al pueblo la última y casi su única palabra (la del Colegio Electoral), en un país de fuerte tradición presidencialista y acostumbrado, en las pocas ocasiones que lo ha podido ejercer, al voto directo.

En el sostenimiento de este mecanismo perverso tuvieron directa y total responsabilidad los dos partidos mayoritarios al no modificar oportunamente los ordenamientos respectivos. Nadie quiso abrir el juego respecto a las posibilidades de alianzas y acuerdos por el miedo a perder votos, aunque este proceso podría haberse realizado en forma franca por los grandes partidos, para tratar de sumarse al resto de las representaciones de centro y de izquierda y poder aislar a las fuerzas de la derecha que no han dejado de sostener posturas de neto reconocimiento al reciente pasado autoritario. El no haber encarado esta nueva instancia de consulta popular en forma abierta, superando manejos casuísticos y oportunistas revela pobreza de miras y objetivos e incapacidad para gobernar un país que está buscando emerger al orden democrático bajo las más intensas presiones del polo autoritario, así como su objetiva descalificación del conjunto de la sociedad, lo que alcanza horizontes de verdadero suicidio político.

La democracia implica, consustancialmente, pluralismo y respeto a la voluntad mayoritaria. La aceptación de este mecanismo indirecto y su debate partidario implicó la posibilidad de alterar la voluntad popular, y de que el descontrol derivado de la no aceptación del dictamen del Colegio Electoral fuera una alternativa a tomar en consideración. Cualquiera de ellas atentaba contra la democracia y favorecía el desarrollo de la opción autoritaria.

Asimismo, es necesario señalar que, en el proceso previo a las últimas elecciones, los distintos partidos políticos no efectuaron mayores esfuerzos por dilucidar sus propuestas programáticas, lo cual oscureció y degradó el debate. De la misma forma, ninguna de las fuerzas contendientes buscó realizar una auto-crítica con sentido propositivo, a partir de la cual, precisara cuál iba a ser su quehacer futuro, sus prioridades y sus estrategias.

Así parece que la única fuerza capaz de generar este movimiento hacia la apertura política será la propia sociedad, la cual deberá superar las organizaciones y estructuras partidarias generando movimientos más abiertos, menos disciplinarios y más dinámicos, y constituidos sobre la base de acuerdos mínimos y de respeto al disenso. Y este tipo de movimientos deberán alcanzar todas las esferas del quehacer social y tener un definido sentido político.

A partir de lo anterior, se hace necesario que la sociedad se democratice a partir de nuevos esquemas, recuperando algunos y recreando otros, buscando modificar la peor de las perversiones, consistente en la práctica sistemática de alterar la percepción de la realidad. Lo anterior se realiza, hoy, a partir de pretendidas posturas científicas y de neta adscripción al "realismo", si bien la real

sustancia y sustrato de estas visiones es de índole finalista y casi religiosa y la conclusión, prefigurada, determina absolutamente la propia percepción e invalida, correlativa y directamente, la de otros, quienes inmediatamente adquieren la calidad de utópicos, incapaces, o enemigos.

Lo anterior es advertible en el tono y forma habitual del debate político, a través de los cuales se busca descalificar e invalidar otras posturas políticas, y no sumar o incorporar modificaciones al pensamiento propio. De esta forma no se dialoga ni se analiza conjuntamente; se expresa el pensamiento de cada uno, pero no con un ánimo de síntesis, sino con la intención de anular la contradicción por la eliminación política del oponente.

Otro de los problemas que dificultan y revelan esta distorsionada percepción de la realidad radica en el papel que inconscientemente muchos de nuestros políticos e intelectuales "progresistas" le asignan a las fuerzas armadas como última frontera y bastión de la nacionalidad. Lo anterior se encuentra presente en las tan recurridas percepciones de que la inestabilidad e ingobernabilidad del orden político llevan, obligadamente, a la intervención militar.

En lo anterior se supone que las fuerzas armadas se incorporan en su mayoría a alguna matriz cultural específica, y que sólo actúan por reacción ante el desorden o por graves fisuras democráticas. Existen múltiples ejemplos en la historia argentina que descalifican esa forma de analizar las conductas de esta institución, y que demuestran su adscripción a proyectos específicos, cada vez más integrales y propios, como es dable apreciar en las diversas y múltiples manifestaciones del golpe militar de 1976. La consecuencia

más seria de este tipo de prédica es que ha logrado permear a algunos sectores sociales, y que, a partir de ella, han sido declarados válidos diversos niveles de represión política.

Sumados a lo anterior se encuentran aquellos que pretenden "solucionar" este frente de problemas propiciando un mejor equipamiento militar, la incorporación de las fuerzas armadas al debate político como institución o la generación de una industria de guerra, atractiva para sus expectativas; todo ello demuestra una alta dosis de incapacidad o de inocencia para captar la contradicción de esta problemática con la democracia y con el consecuente desarrollo de un efectivo proyecto de nación.

Así, y a lo largo de estas páginas hemos ido citando una serie de situaciones e instancias que han ido erosionando las posibilidades de consolidación del proyecto democrático, tanto por errores cometidos por los diversos partidos políticos, por la administración de Alfonsín, por la permanente utilización del veto militar y de la "patria financiera", como de aquellos sectores que se niegan a abandonar el esquema de subsidios permanentes por parte del Estado, constituidos primordialmente por la denominada "patria contratista". Todas ellas revelan canibalismo, perversión y falta de sentido político, de no percepción de la gravedad de la problemática que hoy toca enfrentar y resolver y que obliga a refundar el país sobre bases muy distintas a las del proyecto de la generación de 1880, sólo "rejuvenecido y *aggiornado*" por la gestión de todo signo del anterior régimen militar.

Pero lo sucedido en estas últimas elecciones de 1989, a las cuales se encaminó "castigando" al Partido Radical, y creyendo que un régimen de perfil

peronista favorecería la producción, el empleo, la elevación real del salario y un mejor esquema distributivo, entra en los anales de la historia política argentina de los últimos 50 años como una de las mayores estafas a la voluntad popular expresada en las urnas.

Los prometidos “salariazos”, “revolución productiva”, desarrollo del mercado interno, protección de las economías provinciales y de la pequeña y mediana industria, se “transformaron” en la adopción de los postulados de la representación política más a la derecha del espectro político argentino con un caudal de votos de 10% a nivel nacional (la Unión del Centro Democrático), y en el nombramiento de sus más connotados dirigentes para llevar adelante un severo y violento proceso de ajuste económico en sus ejes más importantes de liquidaciones, privatizaciones, manejo del problema de la deuda externa, lineamientos sustantivos de la política económica, etcétera. Simultáneamente el problema militar ameritó amnistías, recomposiciones salariales y reconocimientos del poder político. Esta recomposición del polo conservador autoritario está marcada por dos momentos capitales, previos a las últimas elecciones. Uno es el 23 de enero de 1989, fecha del asalto al cuartel militar de La Tablada, a partir del cual las fuerzas armadas pasan “nuevamente” a operar en el campo democrático; son reconocidas una vez más como bastión de la nación en el plenario del Congreso Nacional y se las vuelve a autorizar, en los hechos, para que manejen como hipótesis de conflicto la guerra antisubversiva y el frente interno, al otorgárseles vía libre para realizar “inteligencia interna”. El otro momento es el del desborde inflacionario provocado en febrero de ese mismo año, y multiplicado y transfor-



mado en hiperinflacionario desde principios de mayo de 1989.

Todo lo anterior ha constituido lo que algunos analistas denominan un duro golpe encubierto, a través del cual los grandes grupos económicos están cada vez más en condiciones de trastornar e impedir la transición hacia la democracia y de determinar las posibilidades reales de cualquier tipo de cambio político, dado el grado de control y dominio que tienen sobre los distintos factores económicos.

De esta forma, cada vez más, el quehacer político ha devenido irrelevante, y cualquier plan o acción que se quiera realizar carece de viabilidad, a no ser que busque pactar con este sector. La posterior e inmediata remisión a postulados denominados “realistas” –inmovilistas– es casi inevitable, así como la descalificación de todo planteo político y económico alternativo. En esta línea de comportamiento, los personajes generadores del crac inflacionario y especula-

tivo de febrero han sido los llamados a conducir la economía.

El proyecto en marcha busca retrotraernos a situaciones previas a 1930, con un perfil exportador sobre la base de pretendidas ventajas comparativas estáticas, con bajos salarios, sin conflictos sociales, menor número de población, en el marco de una economía totalmente abierta, con bajas tasas de inflación, y alto desempleo y subempleo. Al menos, según dicen, hasta recomponer las bases constitutivas “del país que nunca debimos dejar de ser”, y que posibiliten una lejana redistribución de los progresos y beneficios logrados.

Ya para ir concluyendo, diremos que el proceso político iniciado en 1983 fracasó al no lograr empalmar y solventar los objetivos económicos y sociales con los de orden estrictamente político, defraudando expectativas de vastos sectores de la población. Se insiste ahora en la vieja receta neoliberal y en su argumento político más manido: de que no se pueden ver resultados aquí y ahora debido a una falta de integralidad y consecuencia en la aplicación de las medidas de política económica, por lo cual es necesario persistir con más de lo mismo y no oponer resistencia, pues esto entorpecería nuevamente la obtención de buenos resultados.

Es evidente que esta nueva ofensiva, dentro de la que el movimiento obrero y sus sindicatos son una presa necesaria de controlar y desmembrar, busca someter a nuevas y más intensas presiones al todo social, para así lograr permear, trasmutar y generar nuevos comportamientos políticos y sociales que garanticen la inmovilidad, la seguridad, no la incertidumbre para la libre movilidad de los capitales en aras de su mejor realización y de una reinserción particular en los nuevos ordenamientos a nivel mundial, mane-

jando al país y a sus destinos como una empresa privada y transnacionalizando y desnaturalizando el proyecto como nación.

¿Cómo implantar ahora un pacto o acuerdo social cuando el nivel de gobernabilidad y de representatividad de los dos grandes partidos políticos ha sido erosionado por casi siete años de lucha interpartidaria y de permanente veto político por parte de los sectores militar y financiero?

Hoy es evidente una aguda desorganización del tejido social, así como una ruptura de las solidaridades sociales. De esta forma se recurre, por un lado y cada vez más, a la búsqueda de soluciones individuales, lo cual acentúa los relativismos respecto a sistemas ordenadores de todo tipo de conductas y pone de manifiesto las muy diversas y aleatorias percepciones que se tienen de lo legal, lo justo, lo adecuado, lo verdadero o falso; en todo esto los límites de variabilidad son muy extensos y es más lo que queda por fuera de la norma que dentro de ella, lo que la invalida de hecho como referente y ordenador social.

Al mismo tiempo, y éste es quizás el signo más preocupante de todos, los problemas a ser resueltos en el marco de una sociedad democrática parecen haber sido desplazados del debate público por la pertinaz presión económica que día con día transforma a los pobres en más pobres y que castiga también con rigor a las denominadas clases medias, lo cual somete al conjunto social a presiones extremas y sostenidas que sólo tienen como “salida” la emigración, la solución individual, y la desesperación colectiva que valida respuestas y planteos extremos de cualquier signo. Y esto no suele permitir transitar los caminos de y hacia la democracia.